

Este documento ha sido traducido por la Biblioteca del Congreso de la República con fines meramente informativos para los usuarios de la institución. Se trata de una traducción no oficial del texto en inglés elaborado por June S. Beittel, Analista de Asuntos Latinoamericanos y Ramón Miró, Analista de Asuntos Latinoamericanos del Congressional Research Service (CRS).

Título del documento:

Inglés: Peru: Country Overview and U.S. Relations
N° de páginas: 3
Enlace: <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF12372/4>
Fecha de documento: 4 de abril del 2023

Español: Perú: Panorama del país y relaciones con EE.UU.
N° de páginas: 4
Fecha de documento: noviembre del 2023*

Institución: El Servicio de Investigación del Congreso (CRS) de Estados Unidos brinda análisis políticos y jurídicos a las comisiones y a los Miembros de la Cámara de Representantes y del Senado, independientemente de su afiliación partidista. Como órgano del poder legislativo dentro de la Biblioteca del Congreso, el CRS es un recurso valioso y respetado en el Capitolio desde hace más de un siglo. El CRS es conocido por sus análisis autorizados, confidenciales, objetivos y no partidistas. Su máxima prioridad es garantizar que el Congreso tenga acceso las 24 horas del día a las mejores ideas de la nación.

Derechos de autor: Los documentos elaborados por el Servicio de Investigación del Congreso (CRS) funcionan, como obra del Gobierno de los Estados Unidos, no están sujetos a la protección de los derechos de autor en los Estados Unidos. Cualquier informe de CRS puede ser reproducido y distribuido en su totalidad sin permiso de CRS. Sin embargo, dado que un informe de CRS puede incluir imágenes o material con derechos de autor de un tercero, es posible que deba obtener el permiso del titular de los derechos de autor si desea copiar o utilizar de otro modo material con derechos de autor.

* N. de la T.: Esta traducción ha sido realizada por la Biblioteca del Congreso (traductora: MPZ).

Perú: Panorama del país y relaciones con EE.UU.

4 de abril del 2023

Desde el 2001, Perú ha emergido de un periodo de terrorismo interno, autoritarismo y resultados económicos irregulares a otro de mayor seguridad ciudadana, gobiernos democráticos — aunque a menudo inestables— y crecimiento económico sostenido orientado al mercado. Estados Unidos ha colaborado estrechamente con Perú para poner freno a la delincuencia transnacional relacionada con el narcotráfico, promover el comercio bilateral y medios de vida sostenibles para los peruanos, y fomentar los valores democráticos compartidos. Es probable que a los miembros del Congreso les interese considerar las opciones de Estados Unidos para fortalecer las instituciones democráticas y hacer frente al aumento de la pobreza y la inseguridad alimentaria.

Situación política

La Constitución peruana de 1993, redactada bajo el Gobierno autoritario del presidente Alberto Fujimori (1990- 2000), estableció una forma representativa de gobierno con poderes ejecutivo, legislativo y judicial independientes, y una fuerte protección de los derechos individuales. La Constitución mantiene una estructura estatal centralizada, que históricamente ha contribuido a la concentración del poder político y económico en la capital costera de Lima y ha alimentado el resentimiento entre las poblaciones del interior y andinas del país. Estos grupos afirman que se les excluye de la toma de decisiones sobre cómo se distribuye la riqueza generada por la vibrante economía del país, impulsada por las exportaciones.

En los últimos años, la política peruana se ha caracterizado por debates cargados de ideología sobre la distribución de los beneficios del lucrativo sector minero, la representación de las comunidades rurales e indígenas en la política nacional y el legado de los años autoritarios de Fujimori. La corrupción generalizada y la insuficiencia de los servicios públicos han mermado la confianza de los ciudadanos en los

líderes políticos. El Congreso unicameral de 130 miembros está muy fragmentado, y las afiliaciones a los partidos políticos son cambiantes, lo que complica los esfuerzos de los presidentes peruanos por crear coaliciones de gobierno. La vara baja establecida por la Constitución para el juicio político y la destitución por parte del Congreso ha debilitado aún más la presidencia, lo que ha llevado a la destitución o dimisión forzada de cuatro de los seis presidentes desde el 2018.

El gobierno de Castillo y la destitución

Las elecciones generales de abril del 2021 llevaron al poder al presidente Pedro Castillo — un líder sindical y docente poco conocido del norte de Perú— y a un nuevo Congreso con representantes de 10 partidos. Castillo había sido uno de los 18 candidatos presidenciales que participaron en las elecciones del 2021. Ganó la segunda vuelta en junio del 2021, liderando el partido de extrema izquierda Perú Libre, que se impuso por un estrecho margen a Keiko Fujimori (hija del ex presidente Fujimori), del partido de extrema derecha Fuerza Popular. Castillo obtuvo el apoyo principalmente de las zonas rurales de Perú, incluido el sur andino, donde los votantes indígenas y de ingresos más bajos respondieron a sus promesas electorales de aliviar la pobreza y se identificaron con su origen campesino.

El presidente Castillo asumió el cargo en medio de una frágil recuperación de la pandemia de Coronavirus-2019 (COVID-19). A mediados del 2021, Perú había experimentado la tasa de mortalidad por COVID-19 más alta del mundo, una clasificación que mantenía a finales de marzo del 2023 con más de 650 muertes por cada 100,000 habitantes, según el Centro de Recursos sobre Coronavirus de la Universidad Johns Hopkins. El Gobierno de Castillo también se enfrentó a dificultades políticas, como las acusaciones de los partidos de extrema derecha del Congreso de que su elección había sido fraudulenta. El primer gabinete de Castillo, dominado por miembros de extrema izquierda de

Perú Libre, se desmoronó al cabo de tres meses en medio de la incertidumbre política y las amenazas de nacionalización que agitaron los mercados y devaluaron bruscamente la moneda peruana (el Sol). Los siguientes gabinetes incluyeron ministros más moderados de otros partidos de la izquierda peruana, así como miembros independientes. Sin embargo, los críticos se burlaban de los repetidos cambios en su Gabinete —un ministro era sustituido cada

fracasó, alegando de nuevo que Castillo había incurrido en corrupción y era moralmente incapaz de gobernar. El 7 de diciembre del 2022, ante una tercera votación de vacancia, a la que se esperaba que sobreviviera, Castillo intentó dar un autogolpe. En un movimiento que los observadores compararon con la asunción de poderes dictatoriales por parte del ex presidente Fujimori 30 años antes, Castillo se dirigió a la nación para anunciar la disolución del Congreso y del Poder Judicial, y su intención de gobernar por decreto. En lugar de ello, en cuestión de horas, el Gabinete dimitió, el Tribunal Constitucional invalidó la declaración de Castillo y el Congreso votó a favor de destituir a Castillo por violar la Constitución. A diferencia de Fujimori, Castillo no consiguió el apoyo de las Fuerzas Armadas, que, junto con la Policía Nacional Peruana (PNP), se negaron a actuar contra el Congreso. En su lugar, la PNP detuvo a Castillo cuando intentaba huir a la embajada de México. La fiscal de la nación de Perú solicitó la prisión preventiva de Castillo durante un máximo de 36 meses, mientras las autoridades investigan sus acciones del 7 de diciembre, así como su presunto papel en la corrupción.

Población: 34.2 millones (est. al 2022) ⁽¹⁾

Composición étnica: 60.2% mestizos, 25.8% indios, 5.9% blancos, 3.6% negros, 4.5% otros/no identificados (Censo del 2017).

Índice de pobreza: 25% /est. al 2022) ⁽²⁾

PBI: \$239.3 mil millones; \$7,005 per cápita (2022, valores actuales, est.) ⁽¹⁾

Principales socios comerciales: China (28.3%), EE.UU. (19.4%), Brasil (4.6%) (2022, total comercio) ⁽³⁾

Principales productos comerciales: Exportaciones: cobre, metales preciosos, combustibles minerales, frutas y nueces comestibles. Importaciones: combustibles minerales, maquinaria, vehículos motorizados, electrónica de consumo. 2022) ⁽³⁾.

Parlamento: unicameral (130 miembros, periodo de 5 años) ⁽⁴⁾.

Fuentes: ⁽¹⁾ Perspectivas de la economía mundial del Fondo Monetario Internacional, octubre 2021; ⁽²⁾ Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe de ONU; ⁽³⁾ Trade Data Monitor; ⁽⁴⁾ CIA World Factbook, Map, CRS.



seis días, en promedio— y por el nombramiento de figuras políticas controvertidas, incluidas algunas investigadas por corrupción. En diciembre del 2021, el Congreso peruano lanzó el primero de tres intentos de destitución contra Castillo por «incapacidad moral».

Durante el 2022, los agricultores peruanos y los hogares más pobres se vieron afectados por el alza de los precios del combustible, los fertilizantes y otros productos básicos importados cuyo suministro se vio interrumpido debido a los efectos indirectos de la invasión rusa de Ucrania. A finales de marzo estallaron en Lima grandes protestas contra el Gobierno, ya que muchos peruanos culpaban al presidente de sus dificultades económicas. Los congresistas de la oposición intentaron una segunda vacancia, que

El gobierno de Boluarte y la crisis política

Con la destitución de Castillo, la vicepresidenta Dina Boluarte se convirtió en la primera mujer presidente de Perú según las reglas constitucionales de sucesión. Boluarte, abogada y funcionaria afincada en Lima, originaria del departamento de Apurímac, región de habla quechua, había sido elegida por el partido Perú Libre. Sin embargo, una vez en el cargo se distanció de Castillo y del partido. Boluarte se enfrentó inmediatamente a un desafío a su autoridad por parte de los partidarios rurales e indígenas de Castillo, que consideraban al ex presidente un defensor de sus derechos. En los días siguientes a la detención de Castillo, decenas de miles de sus partidarios organizaron protestas en gran parte del interior de Perú. Las reivindicaciones de los manifestantes incluían la liberación de Castillo, la dimisión de la presidente Boluarte, elecciones anticipadas y la convocatoria de una asamblea constituyente. En

el sur de Perú, los manifestantes bloquearon cientos de carreteras y ocuparon varias docenas de aeropuertos regionales, paralizando gran parte de la economía.

En respuesta a las protestas, Boluarte declaró el estado de emergencia y ordenó a las Fuerzas Armadas y a la PNP que despejaran las carreteras y restablecieran los servicios aeroportuarios. En sus primeras declaraciones públicas, Boluarte pareció aceptar la interpretación de la extrema derecha peruana de las protestas como un ataque terrorista contra la democracia instigado por agentes extranjeros. A medida que crecían las protestas, los enfrentamientos entre manifestantes y policía se hicieron cada vez más violentos. El 15 de diciembre del 2022, unidades de la PNP y del Ejército que defendían un aeropuerto en la ciudad sureña de Ayacucho supuestamente abrieron fuego contra civiles que intentaban ocupar las instalaciones, lo que causó la muerte de 10 civiles. En enero del 2023, en el departamento meridional de Puno (véase el mapa), la PNP y soldados dispararon presuntamente de forma indiscriminada contra manifestantes, causando 17 muertos, entre ellos un agente. En respuesta al presunto uso excesivo de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y la PNP, el 10 de enero, la fiscal de la Nación abrió una investigación sobre el presunto papel de la presidente Boluarte y algunos miembros de su gabinete en la violencia. A mediados de marzo, la Defensoría del Pueblo de Perú estimó que 66 personas habían muerto y más de 1,300 habían resultado heridas como consecuencia de los enfrentamientos y bloqueos antigubernamentales.

Condiciones económicas y sociales

Desde principios de la década de 1990, Perú ha aplicado políticas de crecimiento orientadas al mercado e impulsadas por las exportaciones; asimismo ha implementado medidas para reducir las disparidades de ingresos y abordar la exclusión social. La economía peruana ha sido

una de las de mejor desempeño macroeconómico en América Latina, caracterizada por un entorno de inversión abierto, sólidas exportaciones de materias primas y un gasto público moderado. En virtud del Acuerdo de Promoción Comercial entre Estados Unidos y Perú del 2009, el comercio de Estados Unidos con Perú se duplicó con creces, pasando de 9,000 millones de dólares a más de 22,000 millones de dólares en el 2022. Perú también redujo a la mitad su tasa de pobreza, del 42% en el 2007 al 20% en el 2019. La pandemia provocó un fuerte aumento del desempleo, un repunte de la pobreza y una contracción del 11% del producto bruto interno (PBI) en el 2020. Según la Economist Intelligence Unit, la economía se recuperó en el 2021, con un crecimiento del PBI del 13.6%, pero se ralentizó hasta un crecimiento del 2.7% en el 2022 y un 1.9% previsto para el 2023. La actividad económica ha flaqueado debido a las interrupciones del suministro asociadas a la guerra de Ucrania, el endurecimiento de las condiciones financieras mundiales y la crisis política de Perú. Como gran importador de fertilizantes y alimentos, Perú ha visto aumentar sus precios internos de los alimentos en respuesta al aumento de los costos a nivel internacional. Hasta principios del 2022, Rusia suministraba la mitad de las importaciones de fertilizantes de Perú; la escasez supone un riesgo importante para el sector agrícola. Alrededor de la mitad de la población peruana, según un estudio de las Naciones Unidas de noviembre del 2022, carece actualmente de un acceso fiable a los alimentos, y la pobreza se mantiene por encima de los niveles anteriores a la pandemia.

Relaciones EE.UU.-Perú

Estados Unidos ha mantenido estrechos vínculos bilaterales con sucesivos Gobiernos peruanos, incluido el de la presidente Boluarte. La ayuda bilateral estadounidense tiene como objetivo reducir la producción y el tráfico de cocaína desde Perú, mitigar el impacto de la delincuencia

transnacional y aumentar la seguridad ciudadana mediante el fortalecimiento del sistema de justicia penal peruano. También busca combatir la inseguridad alimentaria y promover medios de vida sostenibles; apoyar los esfuerzos de Perú para proporcionar asistencia humanitaria e integración a los 1,5 millones de refugiados y migrantes venezolanos que residen en Perú, y fortalecer la gobernabilidad y la inclusión social.

La Administración Biden solicitó un total de 107,6 millones de dólares en ayuda a Perú para el AF2024, 1,5 millones menos que los asignados en el AF2023. La solicitud para el AF2024 incluye 55 millones de dólares en ayuda al desarrollo; 8,5 millones de dólares para Programas Mundiales de Salud; 41,3 millones de dólares en ayuda para el Control Internacional de Estupefacientes y la Aplicación de la Ley; 2 millones de dólares en Programas de No Proliferación, Antiterrorismo, Desminado y Programas Relacionados, y 800,000 dólares en fondos para Educación y Entrenamiento Militar Internacional. A mediados de marzo del 2023, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) notificó al Congreso que tenía la intención de ofrecer como garantía 8 millones de dólares en apoyo a Perú en el año fiscal 2023 del Fondo para Crisis Complejas (CCF), que USAID emplea para mitigar conflictos ante crisis imprevistas o violencia.

Algunos miembros del Congreso han pedido a la Administración Biden que detenga toda la asistencia de seguridad a Perú hasta que la Administración pueda confirmar que los funcionarios peruanos responsables de abusos contra los derechos humanos rindan cuentas. A la luz de estas y otras acusaciones de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y el ejército peruanos, el Congreso puede considerar una mayor supervisión de la asistencia policial proporcionada por el Departamento de Estado. El Congreso también puede considerar la posibilidad de revisar los niveles de asistencia de

USAID para garantizar que la financiación apoye adecuadamente los esfuerzos de Perú para ampliar el desarrollo económico y social, aumentar la integridad pública para reducir la corrupción y fortalecer la gestión sostenible de los recursos naturales.

June S. Beittel, Analista de Asuntos Latinoamericanos

Ramón Miró, Analista de Asuntos Latinoamericanos

IF12372

Descargo de responsabilidad

Este documento ha sido elaborado por el Servicio de Investigación del Congreso de EE. UU. (CRS). El CRS está compuesto por personal de la institución sin afiliación partidaria y brinda sus servicios a las comisiones y a los Miembros del Congreso. Este personal trabaja exclusivamente a instancias y bajo la dirección del Congreso. La información contenida en un informe del CRS no debe utilizarse para fines distintos de la comprensión pública de la información proporcionada por el CRS a los Miembros del Congreso en relación con la función institucional del CRS. Los informes de CRS, como obra del Gobierno de los Estados Unidos, no están sujetos a la protección de los derechos de autor en los Estados Unidos. Cualquier informe de CRS puede ser reproducido y distribuido en su totalidad sin permiso de CRS. Sin embargo, un Informe de CRS puede incluir imágenes o material con derechos de autor de un tercero, en este caso, es posible que tenga que obtener el permiso del titular de los derechos de autor si desea copiar o utilizar de otro modo el material con derechos de autor.